

EL FENÓMENO DE LA CORRUPCIÓN, UN ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE COLOMBIA E ITALIA EN EL PERÍODO 2022-2023

Alonso Díaz Carvajal¹

Resumen

Este artículo aborda el fenómeno de la corrupción en Colombia e Italia durante el período 2022-2023 desde una perspectiva comparativa. Se analizan las raíces históricas, la evolución del problema en ambos países y la naturaleza de la corrupción, explorando si se trata de un comportamiento sistémico impulsado por dinámicas globales o una consecuencia de deficiencias regulatorias dentro de sus marcos administrativos y políticos locales. Los hallazgos indican que, si bien ambos países enfrentan retos similares en su lucha contra la corrupción, las respuestas deben adaptarse a las particularidades de cada contexto. En este sentido, se concluye que la corrupción en Colombia e Italia durante el período analizado combina elementos sistémicos y regulatorios. Además de ser un reflejo de malas prácticas y limitaciones institucionales, la corrupción está profundamente condicionada por factores históricos, culturales y económicos, lo que demanda enfoques diferenciados y soluciones integrales para cada nación.

Palabras clave: corrupción, corrupción política, sistema político, política gubernamental, instituciones políticas.

Abstract

This article addresses the phenomenon of corruption in Colombia and Italy during the 2022-2023 period from a comparative perspective. It examines the historical roots, the evolution of the issue in both countries, and the nature of corruption, exploring whether it represents a systemic behavior driven by global dynamics or a result of regulatory shortcomings within their local administrative and political frameworks. The findings indicate that, although both countries face similar challenges in combating corruption, the responses must be adapted to the specificities of each context. In this regard, the study concludes that corruption in Colombia and Italy during the analyzed period combines both systemic and regulatory elements. Beyond being a reflection of poor practices and institutional limitations, corruption is deeply shaped by historical, cultural, and economic factors, demanding differentiated approaches and comprehensive solutions for each nation.

Keywords: corruption, political corruption, political system, government policy, political institutions.

¹ Abogado Cum Laude, Especialista en Derecho Administrativo, Candidato a Magister en Derecho Administrativo de la Universidad Santo Tomas Seccional Tunja, aldica@outlook.com

INTRODUCCIÓN

Colombia e Italia, a pesar de sus diferencias culturales, históricas y geográficas, comparten un problema complejo: la corrupción. En ambos países, este fenómeno afecta tanto al sector público como al privado, expresándose a través de diversas prácticas, desde sobornos hasta la infiltración de organizaciones criminales en las estructuras del Estado. Sin embargo, la manera en que se manifiesta, así como las causas y los mecanismos que lo perpetúan, difiere significativamente entre ambas naciones.

En Colombia, la corrupción tiene un carácter profundamente arraigado y se ha visto agravada por la interacción de factores como la presencia de actores armados ilegales y el narcotráfico. Estas dinámicas han debilitado las instituciones y han erosionado la confianza en el gobierno. El fenómeno es sistémico y se extiende a distintos niveles del poder político, abarcando prácticas comunes como el soborno, la extorsión, el desvío de fondos públicos y el clientelismo. La historia de conflictos armados y las limitaciones estructurales del Estado han facilitado la consolidación de estas prácticas, las cuales se han normalizado en el entorno político y administrativo.

Italia, por otro lado, ha enfrentado durante décadas una corrupción más estructurada, influenciada en gran medida por redes clientelistas y la infiltración de la mafia en el sistema político. La complicidad entre actores políticos y organizaciones criminales ha permitido que la corrupción se arraigue en varias regiones del país, afectando el funcionamiento institucional. Este tipo de corrupción no sólo está más organizado, sino que ha consolidado un esquema en el que las estructuras del Estado se ven capturadas por intereses privados y criminales, debilitando la transparencia y la gobernabilidad.

El presente artículo ofrece un análisis comparativo de la corrupción en Colombia e Italia durante el período 2022-2023, con el propósito de determinar si este fenómeno responde a un comportamiento sistémico o a una falla regulatoria en su gestión y control. El estudio examina las causas históricas, la evolución del problema y la influencia de factores globales y locales en cada país. A través de este enfoque, se busca comprender si las instituciones fomentan la corrupción de manera intrínseca o si la problemática radica en las deficiencias de control y regulación.

Este análisis se sustenta en un enfoque cualitativo con un método de estudio comparativo, permitiendo profundizar en las particularidades de cada contexto. Se utilizan fuentes documentales y estudios previos para examinar cómo se manifiesta la corrupción en cada país y qué factores contribuyen a su persistencia. Esta metodología permite captar patrones que podrían pasar desapercibidos con enfoques cuantitativos, ofreciendo una perspectiva más matizada del fenómeno.

El objetivo central de este estudio es identificar si la corrupción en Colombia e Italia se configura como un problema sistémico o si su persistencia se debe a fallas regulatorias. En esta línea, se busca analizar las raíces históricas de la corrupción en ambos países, evaluar si los factores globales y locales tienen un impacto decisivo y comparar las estrategias anticorrupción implementadas en cada contexto. La investigación también examina las similitudes y diferencias en las manifestaciones del problema, destacando los desafíos comunes y las soluciones particulares necesarias para cada país.

A través del análisis de las políticas y reformas aplicadas en ambos contextos, se identifican los enfoques más efectivos y se destacan las áreas donde persisten dificultades significativas. Esta comparación facilita la comprensión de las fortalezas y debilidades institucionales, proporcionando recomendaciones adaptadas a las necesidades específicas de Colombia e Italia.

Los resultados de la investigación muestran que, aunque las causas y mecanismos de la corrupción varían, en ambos países el fenómeno tiene una dimensión tanto sistémica como regulatoria. En Colombia, la debilidad institucional, combinada con el narcotráfico y los actores armados, crea un entorno favorable para la corrupción en todos los niveles del poder. En Italia, la corrupción es más estructural y organizada, influenciada por la participación de la mafia y la consolidación de redes clientelistas en la política. Estos contextos ilustran cómo la corrupción puede perpetuarse a través de dinámicas complejas, que involucran tanto la captura del Estado como la falta de controles adecuados.

Este estudio subraya la importancia de entender la corrupción como un fenómeno multidimensional que requiere estrategias diferenciadas. Al identificar si la corrupción tiene una base sistémica o si su persistencia responde a deficiencias regulatorias, se facilita la formulación de políticas más eficaces y adaptadas a las realidades de cada país. Además, el enfoque comparativo proporciona lecciones valiosas para otros países con desafíos similares, permitiendo el desarrollo de estrategias tanto globales como locales en la lucha contra la corrupción.

En última instancia, la investigación resalta la necesidad de promover reformas estructurales, fortalecer los mecanismos de control, aumentar la transparencia y fomentar una cultura de integridad. Sólo a través de estos esfuerzos coordinados será posible mitigar los efectos nocivos de la corrupción y avanzar hacia una gobernanza más justa y eficiente, tanto en Colombia como en Italia.

CAPITULO I

CAUSAS HISTÓRICAS DE LA CORRUPCIÓN EN COLOMBIA E ITALIA

La corrupción en Colombia e Italia tiene raíces históricas profundas, aunque responde a dinámicas particulares en cada contexto. En Colombia, está estrechamente ligada a la violencia, el narcotráfico y la fragilidad institucional. En

Italia, por su parte, se asocia con la influencia del crimen organizado, la política y los negocios. Ambos países comparten un pasado marcado por el clientelismo y la corrupción política, pero las causas y manifestaciones específicas varían en función de sus respectivas trayectorias históricas y culturales.

Durante el período 2022-2023, la percepción y manifestación de la corrupción ha cambiado en ambas naciones. En Colombia, los escándalos en la contratación pública y las denuncias de corrupción en los niveles más altos del gobierno han incrementado la desconfianza ciudadana (Transparencia por Colombia, 2023). En Italia, aunque la corrupción sigue siendo un problema persistente, se han logrado avances en la transparencia y en la implementación de reformas orientadas a combatirla (Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), 2024).

Comprender si la corrupción en estos países es un fenómeno sistémico o el resultado de fallas regulatorias requiere un análisis tanto de los factores globales como de los locales. La globalización y la creciente interconexión económica han influido en la forma en que operan las redes corruptas, pero las particularidades de los sistemas políticos y administrativos de cada nación siguen desempeñando un papel fundamental. En Colombia, la falta de capacidad institucional y la debilidad del estado de derecho son factores clave que permiten la propagación de la corrupción. En Italia, en cambio, la corrupción está más relacionada con la ineficiencia de la burocracia y la persistencia del crimen organizado, lo que dificulta su erradicación.

1. COMPARACIÓN DE LAS CAUSAS HISTÓRICAS DE LA CORRUPCIÓN EN COLOMBIA E ITALIA

La corrupción, definida como el abuso del poder para obtener beneficios privados, es un fenómeno que afecta a numerosos países a nivel global. En el caso de Colombia e Italia, aunque ambos comparten un problema de corrupción arraigado, sus orígenes y los factores que han permitido su perpetuación difieren significativamente. Este ensayo se enfoca en analizar las causas históricas que han dado lugar a la corrupción en cada uno de estos países, resaltando tanto las similitudes como las diferencias fundamentales en sus respectivos contextos históricos y sociales.

1.1 Colombia: Raíces Históricas de la Corrupción

En Colombia, las raíces de la corrupción se encuentran en el período colonial, cuando se establece un sistema político y económico basado en el clientelismo y el patrimonialismo. Durante esta época, el sistema de encomiendas y la administración de justicia se caracterizan por prácticas corruptas, ya que los funcionarios coloniales utilizan sus cargos para obtener beneficios personales (Mizzetti & Polacchini, 2023). Esta estructura fomenta una cultura de poder en la

que la lealtad personal y las redes informales de influencia prevalecen sobre las instituciones formales.

Con la independencia, el país hereda un sistema político frágil, marcado por la inestabilidad y las luchas entre facciones. A lo largo del siglo XIX y gran parte del XX, el clientelismo se consolida como la principal forma de organización política. Los líderes políticos construyen sus bases de poder mediante el intercambio de favores y la distribución de recursos públicos a cambio de apoyo político, un sistema que persiste incluso tras la adopción de estructuras democráticas formales (Ayala García & et al, 2022).

Durante el siglo XX, la corrupción en Colombia se profundiza debido al conflicto armado interno y al narcotráfico. Los grupos armados ilegales y los carteles de la droga penetran en las instituciones estatales, utilizando la corrupción como un mecanismo para asegurar su control territorial y económico. Estas dinámicas perpetúan un ciclo de corrupción que sigue representando uno de los desafíos más complejos para el país en la actualidad (Mizzetti & Polacchini, 2023).

En resumen, las causas históricas de la corrupción en Colombia, corresponden a:

- **Colonialismo y legado institucional:** La corrupción en Colombia tiene sus orígenes en la época colonial, cuando las estructuras administrativas y de gobierno establecidas por la Corona española permitían a los funcionarios públicos utilizar sus posiciones para el enriquecimiento personal. La recaudación de impuestos, la asignación de encomiendas y la administración de justicia se caracterizaban por el desvío de recursos y la manipulación del poder para obtener beneficios particulares. Los funcionarios coloniales, lejos de responder a principios de transparencia, gestionaban sus jurisdicciones como feudos personales, consolidando una cultura donde la lealtad personal era más importante que el respeto por las leyes y normas formales (Mizzetti & Polacchini, 2023).

Con la independencia en el siglo XIX, este patrón de conducta no desapareció, sino que se adaptó a las nuevas estructuras republicanas. En lugar de reforzar instituciones sólidas, las luchas entre caudillos y élites regionales perpetuaron prácticas como el clientelismo y el nepotismo, lo que dificultó la consolidación de un Estado transparente y eficiente. Las redes de poder se mantuvieron mediante la distribución de cargos públicos y favores a cambio de lealtad política, fomentando la corrupción como un elemento estructural del sistema político (Castillo Pinta, 2021).

- **Violencia y conflicto armado:** El conflicto armado, que ha persistido por más de cinco décadas en Colombia, ha creado un entorno favorable para la expansión de la corrupción. Las guerrillas, los paramilitares y los narcotraficantes han encontrado en la corrupción una herramienta eficaz para garantizar su financiamiento y mantener su control territorial. Estas

organizaciones han penetrado las instituciones públicas, obteniendo contratos estatales, protección jurídica e información privilegiada mediante sobornos y alianzas corruptas. Además, los actores políticos y económicos que buscan mantener influencia en ciertas regiones también recurren a la corrupción para asegurarse el apoyo de estos grupos armados. Este ciclo de violencia y corrupción ha debilitado al Estado, dificultando su capacidad para garantizar el estado de derecho y brindar servicios básicos a la población, especialmente en las áreas más afectadas por el conflicto (De La Hoz Mercado, 2021).

- ***Clientelismo y debilidad del Estado:*** El clientelismo, una práctica profundamente arraigada en la política colombiana, se basa en el intercambio de favores y recursos a cambio de apoyo político. Esta dinámica ha minado la capacidad del Estado para actuar de manera imparcial y eficiente, ya que los políticos priorizan la satisfacción de sus redes clientelistas sobre el bienestar general de la sociedad. En las campañas electorales, los candidatos ofrecen cargos públicos y beneficios sociales en compensación por votos, lo que distorsiona la representación democrática. A nivel local, esta dinámica es aún más pronunciada, con políticos y líderes comunitarios que negocian directamente con los ciudadanos a cambio de apoyo electoral. La debilidad institucional del Estado colombiano facilita la perpetuación de estas prácticas, ya que la falta de control efectivo y la complicidad dentro de las instituciones públicas permiten que las redes clientelistas operen sin mayores obstáculos (Kahn & Saavedra, 2021).
- ***Economía informal y narcotráfico:*** La economía informal y el narcotráfico desempeñan un papel clave en la expansión de la corrupción en Colombia. La gran cantidad de recursos generados por estas actividades ilegales alimenta redes de sobornos, facilita el lavado de dinero y financia campañas políticas, consolidando la influencia del crimen organizado en las instituciones del Estado. Durante las décadas de 1970 y 1980, los carteles de la droga, como los de Medellín y Cali, infiltraron la política y la justicia mediante una combinación de sobornos, intimidación y violencia. La capacidad de estos carteles para influir en jueces, funcionarios públicos y políticos les permitió operar con impunidad y expandir sus actividades ilícitas a gran escala (Niño, 2023). La corrupción, en este contexto, sirvió para garantizar la protección de los narcotraficantes y también facilitó la violencia, al permitir que estos grupos aseguraran el control sobre territorios estratégicos y rutas de tráfico.
- ***Escándalos políticos y reacciones:*** A lo largo de su historia reciente, Colombia ha sido escenario de múltiples escándalos de corrupción que han sacudido las altas esferas del poder. Uno de los casos más emblemáticos fue el Proceso 8000, que reveló cómo la campaña presidencial de Ernesto

Samper en la década de 1990 había recibido financiamiento de los carteles de la droga. Este caso puso en evidencia la profundidad de la corrupción en el sistema político colombiano y provocó una crisis institucional que debilitó la confianza pública en el gobierno. En años más recientes, el escándalo de Odebrecht expuso la influencia de la corrupción transnacional, con sobornos dirigidos a políticos y funcionarios para asegurar contratos de infraestructura. Estos casos han generado indignación pública y presionado para la adopción de reformas, aunque la implementación de estas medidas ha sido limitada por la persistente complicidad entre actores estatales y privados (Pantoja Barrios, 2022).

- ***Corrupción contemporánea y retos actuales:*** En la actualidad, la corrupción continúa siendo uno de los mayores obstáculos para el desarrollo en Colombia. Se manifiesta en múltiples formas, desde el desvío de recursos públicos hasta la manipulación de procesos electorales y el tráfico de influencias. Las contrataciones públicas siguen siendo un foco importante de corrupción, con empresas privadas que ofrecen sobornos a cambio de contratos ventajosos, mientras que políticos y funcionarios se enriquecen a costa del erario. A pesar de los esfuerzos del gobierno por combatir la corrupción mediante la creación de organismos de control y la promulgación de leyes más rigurosas, la impunidad sigue siendo alta. La falta de voluntad política, sumada a la debilidad institucional y a la complicidad de sectores públicos y privados, ha dificultado la implementación efectiva de reformas. La corrupción afecta la eficiencia del gobierno y debilita la confianza de los ciudadanos en las instituciones, profundizando la desigualdad y frenando el desarrollo económico y social del país (Ayala García & et al, 2022).

El reto actual de Colombia radica en promover una cultura de integridad y transparencia que permita superar las dinámicas corruptas que han marcado su historia. Para ello, es fundamental fortalecer las instituciones, garantizar la independencia de los órganos de control y fomentar la participación activa de la sociedad civil en la vigilancia de la gestión pública. Sólo a través de un esfuerzo coordinado entre el Estado, el sector privado y la ciudadanía será posible mitigar los efectos de la corrupción y avanzar hacia un modelo de gobernanza más justo y eficiente.

1.2 Italia: Orígenes Históricos de la Corrupción

Italia presenta un problema de corrupción cuyas raíces se remontan a la época pre moderna, con origen en las dinámicas de poder de las Repúblicas Marítimas y los Estados Papales. Durante estos períodos, el nepotismo y el clientelismo son prácticas comunes en la administración pública, utilizadas para consolidar el control político y económico. La distribución de cargos responde más a lealtades

personales y alianzas que a criterios de mérito, permitiendo que la corrupción se normalice como parte del ejercicio del poder (Callejón Hernández, 2023).

Con la unificación de Italia en 1861, el nuevo Estado hereda una burocracia impregnada por estas prácticas corruptas. En el sur del país, en particular, el Estado es percibido como una entidad distante y opresora, lo que fomenta la resistencia local y el uso de la corrupción como un medio de negociación con el poder central. Las redes clientelistas emergen como una forma alternativa de gestionar los recursos y sortear la ineficiencia estatal, consolidando prácticas que debilitan la legitimidad del gobierno y dificultan la integración de las regiones más rezagadas (Broggio, 2023).

En el siglo XX, la corrupción en Italia se convierte en un fenómeno más complejo y estructurado. Durante el dominio de la *Democracia Cristiana* (1946-1994), el partido en el poder utiliza la distribución de cargos, contratos y recursos públicos como una estrategia para mantener su hegemonía política. Estas prácticas institucionalizan la corrupción, creando un sistema donde el clientelismo es clave para el ascenso político y la fidelidad electoral. En paralelo, la mafia fortalece su influencia en la política y la economía, especialmente en el sur del país, aprovechando la debilidad institucional para penetrar en las estructuras estatales. Esta infiltración permite que los actores criminales accedan a fondos públicos y contratos estatales, consolidando un sistema en el que política, negocios y crimen organizado operan en complicidad (Carlioni, 2017).

Durante los años 90, el escándalo de *Mani Pulite* revela la magnitud de la corrupción sistémica en Italia, exponiendo las redes de connivencia entre políticos, empresarios y organizaciones criminales. La operación muestra cómo las estructuras de poder se sostienen mediante el tráfico de influencias y los sobornos, lo que genera una profunda crisis política y provoca el colapso de la *Democracia Cristiana*. Aunque el escándalo marca un punto de inflexión y promueve ciertas reformas, la corrupción se adapta a las nuevas condiciones políticas, encontrando formas de sobrevivir dentro de un sistema renovado (Tomazelli Lemos & Vetis Zaganelli, 2020).

En el presente, la corrupción sigue siendo un problema significativo en Italia, aunque se manifiesta de manera más sofisticada. Las redes mafiosas, a pesar de los esfuerzos por reducir su poder, continúan infiltrándose en sectores estratégicos como la contratación pública, la gestión de residuos y las obras de infraestructura. La burocracia estatal, a menudo criticada por su ineficiencia, facilita estas prácticas al crear espacios para sobornos y negociaciones informales. Los procedimientos administrativos complejos y los vacíos legales se convierten en obstáculos que favorecen la corrupción, debilitando la transparencia y la eficiencia gubernamental (Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), 2024).

A pesar de los esfuerzos por combatir la corrupción, como la creación de la *Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)* y la introducción de reformas legales, los avances son limitados. Las instituciones estatales enfrentan dificultades para implementar controles efectivos debido a la complicidad entre actores públicos y privados. En muchas regiones, especialmente en el sur, la mafia sigue teniendo un peso considerable en la política local, lo que perpetúa un ciclo de corrupción y dificulta la gobernanza. La falta de confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas agrava el problema, ya que muchos italianos perciben la corrupción como un mal endémico del sistema político (*Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)*, 2024).

La corrupción afecta de manera transversal a la política, la economía y la sociedad italiana. La asignación de contratos públicos, la manipulación de procesos electorales y el tráfico de influencias son prácticas comunes que erosionan la confianza en las instituciones y frenan el desarrollo económico. A pesar de algunos avances en transparencia y control, las redes de corrupción se adaptan rápidamente a los cambios legislativos, lo que dificulta su erradicación. La combinación de crimen organizado, ineficiencia burocrática y alianzas políticas corruptas crea un sistema complejo que requiere esfuerzos sostenidos para ser desmantelado.

En conclusión, la corrupción en Italia tiene raíces profundas que se extienden desde el período pre moderno hasta la actualidad, evolucionando en respuesta a los cambios políticos y sociales del país. A lo largo de los siglos, las prácticas corruptas han adoptado distintas formas, involucrando a la nobleza, la iglesia, la mafia y los actores políticos. A pesar de los intentos por reducir su impacto, la corrupción sigue siendo un desafío persistente que obstaculiza la eficiencia gubernamental y debilita la cohesión social. El desarrollo de un sistema judicial más robusto, la promoción de una cultura de integridad y la participación activa de la sociedad civil son esenciales para avanzar hacia una gobernanza más justa y transparente. Sin un esfuerzo coordinado entre el Estado, la ciudadanía y el sector privado, la corrupción continuará siendo un obstáculo para el progreso de Italia.

Así, puede enumerarse el proceso histórico de la corrupción en Italia:

- ***Renacimiento y Siglos XVII-XVIII: Corrupción en los Estados Independientes.*** Durante el Renacimiento, Italia está fragmentada en múltiples estados independientes, cada uno gobernado por familias poderosas que controlan la política local y regional. Entre los casos más emblemáticos destacan los Medici en Florencia y los Borgia en Roma, quienes consolidan su poder mediante la manipulación de cargos públicos y la venta de indulgencias religiosas. La corrupción en este contexto no se percibe necesariamente como una desviación del orden social, sino como una estrategia legítima para asegurar alianzas y estabilidad política. El nepotismo y el clientelismo dominan las relaciones de poder, con cargos en

la administración pública y la iglesia que se compran y venden abiertamente. La influencia de estas familias se extiende en la política y en la economía y en la cultura, donde financian obras artísticas y proyectos urbanísticos para reforzar su prestigio. Esta cultura de redes informales y favores personales crea un entorno propicio para que la corrupción se arraigue profundamente en las estructuras de poder (Sinisi, 2019).

- **Siglo XIX: Unificación y Consolidación del Clientelismo.** Con la unificación de Italia en 1861, el nuevo Estado hereda una burocracia fragmentada e ineficiente que refleja las prácticas corruptas desarrolladas durante siglos. El proceso de unificación, aunque exitoso en términos formales, no logra consolidar un sistema administrativo fuerte ni eliminar las redes de clientelismo existentes. Las élites políticas y económicas que emergen después de la unificación utilizan el aparato estatal para sus propios fines, perpetuando la corrupción a nivel tanto local como nacional. En el sur de Italia, donde el Estado se percibe como una entidad ajena y opresora, la corrupción se convierte en un mecanismo de adaptación para la población, que recurre a redes informales de poder para obtener servicios básicos y protección. Esta dinámica intensifica las divisiones entre el norte industrializado y el sur rural, fomentando una desconfianza mutua que perdura hasta hoy (Sinisi, 2019).
- **Siglo XX: Fascismo, Corporativismo y Reconstrucción Postguerra.** Durante el régimen fascista de Benito Mussolini (1922-1943), la corrupción se mantiene, aunque adopta formas más controladas y encubiertas. Mussolini centraliza el poder mediante un sistema corporativista en el que las lealtades personales y las redes de favores sustituyen los procesos institucionales transparentes. Aunque el régimen reprime ciertas formas de corrupción visible, esta sigue presente en la administración pública y en las relaciones con el sector empresarial. Tras la Segunda Guerra Mundial, durante la reconstrucción de Italia, la mafia amplía su influencia, especialmente en el sur del país, donde controla la distribución de recursos y la ejecución de proyectos de infraestructura. La combinación de clientelismo y crimen organizado marca esta etapa, dificultando la consolidación de un Estado eficiente y transparente (Martini, 2023).
- **Décadas de 1980-1990: Mani Pulite y el Colapso de la Primera República.** Las décadas de 1980 y 1990 representan un punto de inflexión en la historia contemporánea de la corrupción en Italia. La operación *Mani Pulite* ("Manos Limpias") revela una extensa red de corrupción que involucra a políticos, empresarios y funcionarios públicos en prácticas de sobornos y tráfico de influencias. Las investigaciones exponen cómo los principales partidos políticos, especialmente los que dominan la llamada *Primera República*, utilizan la corrupción como un mecanismo para financiar campañas y asegurar el control del poder. Este escándalo provoca el

colapso de la estructura política tradicional y abre espacio para nuevas fuerzas, como el partido Forza Italia, liderado por Silvio Berlusconi, quien también se enfrenta a múltiples acusaciones de corrupción a lo largo de su carrera política (Tomazelli Lemos & Vetis Zaganelli, 2020).

- **Siglo XXI: Persistencia y Adaptación de la Corrupción.** En el siglo XXI, la corrupción en Italia sigue siendo un problema estructural que afecta a múltiples sectores, desde la política y la administración pública hasta el sector empresarial. A pesar de los esfuerzos por introducir reformas y mejorar la transparencia, la corrupción se adapta a los cambios institucionales, encontrando nuevas formas de operar. Los contratos públicos y los proyectos de infraestructura continúan siendo focos de corrupción, con actores privados y públicos que negocian sobornos y favores para asegurar licitaciones ventajosas. La burocracia italiana, a menudo criticada por su ineficiencia, favorece estas dinámicas, ya que los procedimientos engorrosos y las lagunas legales ofrecen oportunidades para la manipulación (Mazzolini, 2020).

La mafia sigue siendo una fuerza significativa, especialmente en el sur del país, donde mantiene su influencia sobre la política local y la economía. A través de la corrupción, estas organizaciones criminales aseguran acceso a fondos públicos y contratos estratégicos, perpetuando la desigualdad regional y frenando el desarrollo económico. La corrupción también se manifiesta en los procesos electorales, con candidatos que recurren al tráfico de influencias y la compra de votos para garantizar su victoria. A pesar de las reformas judiciales y la creación de la *Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)*, la impunidad sigue siendo alta, lo que dificulta la erradicación del problema (Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), 2024).

- **Impacto Socioeconómico y Desafíos Actuales.** La corrupción en Italia tiene un impacto profundo en la confianza pública en las instituciones, en la eficiencia de la administración pública y en el desarrollo económico. La asignación de recursos públicos basada en intereses privados reduce la calidad de los servicios y fomenta la desigualdad entre regiones, exacerbando la brecha entre el norte más desarrollado y el sur más empobrecido. La ineficiencia administrativa alimenta un ciclo de subdesarrollo que perpetúa la dependencia de redes clientelistas y de la influencia mafiosa en ciertas áreas. La falta de transparencia en la gestión pública, combinada con la influencia del crimen organizado, crea un entorno en el que los ciudadanos perciben la corrupción como un mal inevitable del sistema político (Broggio, 2023).

A pesar de algunos avances en términos de transparencia y control, la persistencia de la corrupción refleja la necesidad de reformas más profundas y sostenidas. La lucha contra la corrupción requiere la implementación de leyes más

rigurosas y el fortalecimiento del sistema judicial y la promoción de una cultura de integridad y participación ciudadana. Sin un esfuerzo coordinado entre el Estado, la sociedad civil y el sector privado, la corrupción seguirá siendo un obstáculo para el progreso económico y la cohesión social en Italia.

La corrupción en Italia es un fenómeno complejo que ha evolucionado a lo largo de los siglos, adaptándose a los cambios políticos y sociales del país. Desde las prácticas de nepotismo y clientelismo del Renacimiento hasta las redes de influencia contemporáneas que involucran a la mafia y a actores políticos, la corrupción sigue siendo un desafío estructural. La historia muestra que las dinámicas corruptas no desaparecen fácilmente, sino que se transforman junto con el contexto institucional y económico. Sólo mediante una combinación de reformas estructurales, una justicia más eficaz y una participación activa de la ciudadanía será posible avanzar hacia una gobernanza más transparente y equitativa.

2. EVOLUCIÓN DEL FENÓMENO DE LA CORRUPCIÓN, SUS CAMBIOS Y VARIACIONES EN COLOMBIA E ITALIA EN EL PERÍODO 2022-2023

El concepto de corrupción puede entenderse desde diversas perspectivas teóricas. Los enfoques institucionales explican la corrupción como una consecuencia de la debilidad o mal funcionamiento de las instituciones públicas, donde las reglas formales no se aplican de manera efectiva y las normas informales prevalecen. Por otro lado, la teoría de la elección racional sostiene que los actores corruptos toman decisiones calculadas al evaluar los beneficios y riesgos de involucrarse en actividades ilícitas, lo que sugiere que la corrupción surge cuando las oportunidades de enriquecimiento superan las sanciones previstas (Valenzano & Serra Cruz, 2023). En términos generales, la corrupción se define como el abuso del poder público para obtener beneficios privados, afectando tanto la eficiencia del Estado como la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.

La corrupción puede clasificarse en varios tipos, cada uno con características y desafíos específicos. La corrupción política implica el uso de recursos públicos para obtener ventajas electorales o mantener el poder; la corrupción administrativa se refiere a la manipulación de procesos burocráticos para beneficiar intereses privados, como la concesión de licencias o contratos; y la corrupción económica involucra prácticas como el soborno y el lavado de dinero, que afectan directamente el mercado y la competencia. Estos tipos de corrupción no actúan de manera aislada, sino que a menudo se interconectan, creando sistemas complejos de poder que son difíciles de dismantelar.

Este fenómeno tiene un impacto global, manifestándose en casi todos los países del mundo, aunque adopta diferentes formas según el contexto político, social y

económico de cada región. La corrupción, por lo tanto, debe analizarse considerando las particularidades de cada entorno. En este contexto, Colombia e Italia representan casos significativos debido a la persistencia del problema y los retos estructurales que enfrentan para combatirlo. Aunque ambos países comparten desafíos comunes en la lucha contra la corrupción, como la necesidad de fortalecer sus instituciones y mejorar la transparencia, sus historias y marcos legales muestran diferencias notables que afectan la naturaleza y las dinámicas de corrupción en cada contexto.

En este capítulo se busca analizar la evolución de la corrupción en Colombia e Italia durante el período 2022-2023 desde una perspectiva comparativa. El enfoque permite identificar las similitudes y diferencias en las formas en que la corrupción se manifiesta y persiste en ambos países, así como los factores que dificultan su control. A través de este análisis, se espera comprender las particularidades de cada caso y aportar una visión más amplia sobre los mecanismos globales y locales que perpetúan la corrupción y las estrategias que podrían adaptarse a cada contexto para enfrentar este problema.

2.1 Corrupción en Colombia durante el Período 2022-2023: Escándalos, Reformas y Desafíos

Colombia enfrenta una larga historia de corrupción profundamente vinculada con actores políticos, económicos y criminales. Durante el período 2022-2023, varios escándalos de gran magnitud resaltan la persistencia de este problema y su impacto negativo en la gobernabilidad, el desarrollo económico y la confianza pública. Entre estos casos, destaca la contratación irregular en entidades públicas y los vínculos entre funcionarios y narcotraficantes, lo que pone en evidencia la fragilidad institucional del país. De acuerdo con informes de Transparencia por Colombia, la corrupción continúa siendo un problema de gran magnitud, afectando directamente la capacidad del gobierno para implementar políticas públicas de manera eficiente (Transparencia por Colombia, 2023).

A pesar de los esfuerzos legislativos, la implementación de reformas que buscan combatir la corrupción se enfrenta a múltiples desafíos. El gobierno ha introducido nuevas normativas para fortalecer los controles institucionales y las sanciones a los actos corruptos, pero la resistencia política, la escasez de recursos y las dinámicas clientelistas dificultan su aplicación. Esta resistencia refleja las profundas redes de influencia que operan dentro de la administración pública, donde los intereses privados y políticos obstaculizan las reformas orientadas a mejorar la transparencia y la eficiencia del gobierno.

El período 2022-2023 está marcado por la elección de un nuevo gobierno encabezado por Gustavo Petro, quien asumió la presidencia en 2022 con una agenda centrada en la lucha contra la corrupción y la reforma del Estado. Petro

prometió implementar reformas profundas que buscan debilitar las redes clientelistas y mejorar la transparencia en la administración pública. Sin embargo, su gobierno se enfrenta a un entorno político complejo y polarizado, lo que complica la adopción y ejecución de estas reformas estructurales (Villalobos Risco, 2023).

A lo largo de este período, los escándalos de corrupción involucrando a altos funcionarios y políticos subrayan la magnitud del problema. En 2022, uno de los casos más destacados fue el relacionado con la contratación irregular en varias entidades gubernamentales, lo que provocó investigaciones, sanciones administrativas y la renuncia de varios funcionarios. Este tipo de escándalos resalta las dificultades que enfrentan las instituciones encargadas de supervisar el uso de los recursos públicos y pone en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y rendición de cuentas.

Entre los casos más notorios, destaca el Cartel de la Contratación en Bogotá, un esquema de sobornos y contratos amañados que involucra a políticos y funcionarios públicos. Además, sectores clave como la infraestructura y la salud se ven afectados por prácticas corruptas que comprometen la calidad de los servicios y generan pérdidas millonarias. Estos escándalos reflejan la persistencia de patrones de corrupción sistémica que afectan tanto la administración pública como la gestión de recursos destinados a servicios esenciales (Transparencia por Colombia, 2023).

A nivel internacional, los indicadores también reflejan la gravedad del problema. Según el Índice de Percepción de la Corrupción (CPI) de Transparencia Internacional (2022), Colombia obtuvo una puntuación de 39 sobre 100, ubicándose en el puesto 91 de 180 países evaluados. Esta puntuación indica un alto nivel de percepción de corrupción en el sector público, lo que erosiona la confianza ciudadana en las instituciones y genera un entorno de desilusión y apatía hacia la política. En 2023, a pesar de los esfuerzos gubernamentales, el país no muestra mejoras significativas en este indicador, lo que sugiere que los desafíos estructurales siguen sin resolverse (Transparencia por Colombia, 2023).

El impacto económico de la corrupción también es considerable. Según estimaciones del Banco Mundial (2023), la corrupción en Colombia podría costar entre el 0.5% y el 4% del PIB cada año, lo que representa pérdidas de miles de millones de dólares. Este costo afecta la eficiencia económica y limita la capacidad del Estado para financiar políticas públicas y programas sociales esenciales. La corrupción se convierte así en un obstáculo significativo para el desarrollo sostenible del país y agrava las desigualdades sociales.

Las percepciones ciudadanas sobre la corrupción reflejan el escepticismo hacia las instituciones. De acuerdo con el Barómetro de las Américas (2022), más del 70% de los colombianos considera que el nivel de corrupción en el gobierno es alto, lo que genera una crisis de confianza que dificulta la legitimidad del Estado y

la participación política (Villalobos Risco, 2023). Esta percepción negativa refuerza la necesidad de promover reformas efectivas que se enfoquen en sancionar la corrupción y transformen las estructuras institucionales que permiten su perpetuación.

A pesar de la adopción de reformas legales y medidas anticorrupción en los últimos años, su implementación ha sido inconsistente y limitada. Las instituciones encargadas de supervisar la gestión pública, como la Fiscalía General y los órganos de control, enfrentan limitaciones operativas, mientras que la impunidad sigue siendo alta. La debilidad institucional, combinada con la influencia de redes de poder corruptas, crea un entorno en el que los actos ilícitos rara vez son castigados, lo que perpetúa la desconfianza de los ciudadanos en el sistema judicial.

El período 2022-2023 evidencia la complejidad del problema de la corrupción en Colombia, donde los escándalos y las deficiencias institucionales coexisten con intentos de reforma y modernización del Estado. Aunque el gobierno de Gustavo Petro, intenta implementar cambios profundos, las dinámicas estructurales y la resistencia de ciertos sectores dificultan la transformación del sistema. La corrupción sigue representando un desafío crítico para la gobernabilidad y el desarrollo del país, lo que resalta la urgencia de fortalecer las instituciones, mejorar la transparencia y fomentar la participación activa de la sociedad civil en la vigilancia de la gestión pública.

2.2 El caso italiano

Italia continúa enfrentando un problema significativo de corrupción, especialmente en el sector público. A lo largo de 2022-2023, varios escándalos han involucrado a altos funcionarios y empresas, revelando la existencia de redes complejas de corrupción que abarcan múltiples niveles del gobierno. A diferencia de Colombia, Italia ha avanzado en la adopción de reformas estructurales enfocadas en acelerar los procesos judiciales y mejorar la transparencia en la administración pública. Estas reformas buscan sancionar a los responsables y prevenir la corrupción mediante la introducción de procedimientos más rigurosos (Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), 2024).

La Autoridad Nacional Anticorrupción (ANAC), ha liderado importantes iniciativas para reforzar la supervisión de la contratación pública y mejorar los mecanismos de control en la financiación de partidos políticos. Estas medidas han logrado reducir parcialmente la percepción de impunidad en algunos sectores, aunque persisten desafíos en áreas estratégicas como la adjudicación de contratos para grandes proyectos de infraestructura. Las prácticas corruptas, especialmente en las regiones del sur del país, donde la mafia mantiene una influencia considerable,

continúan minando la transparencia de la administración pública (Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), 2024).

En el Índice de Percepción de la Corrupción (CPI) de Transparency International (2022), Italia obtiene una puntuación de 56 sobre 100, ubicándose en el puesto 41 entre 180 países evaluados. Esta puntuación refleja una situación menos severa en comparación con Colombia, aunque todavía evidencia serias limitaciones en la lucha contra la corrupción. La posición relativamente favorable de Italia en el ranking es producto de los esfuerzos recientes por fortalecer la gobernanza, pero los avances son desiguales, y ciertos sectores continúan siendo vulnerables a la corrupción (Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), 2024).

Entre los escándalos más notorios de este período destaca el caso Mafia Capitale, un esquema de corrupción descubierto en Roma que involucra a políticos y empresarios en prácticas ilegales relacionadas con contratos públicos. Esta red operaba mediante la manipulación de licitaciones y sobornos para garantizar la adjudicación de contratos a empresas vinculadas con el crimen organizado. Además, el caso reveló cómo estas prácticas corruptas se extendían a sectores estratégicos de la gestión pública, afectando la eficiencia de los servicios esenciales (Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), 2024).

Otro punto crítico en la lucha contra la corrupción en Italia es la contratación pública, un ámbito particularmente vulnerable debido al tamaño y la complejidad de los proyectos de infraestructura. La adjudicación de contratos multimillonarios frecuentemente está sujeta a prácticas irregulares, incluyendo acuerdos colusorios y sobornos. A pesar de los avances en la implementación de controles más estrictos, la supervisión sigue enfrentando desafíos, especialmente en proyectos que involucran tanto a actores públicos como privados.

El impacto económico de la corrupción en Italia es significativo. De acuerdo con la Corte de Cuentas (Corte dei Conti), la corrupción le cuesta al país alrededor de 60,000 millones de euros al año, lo que equivale a aproximadamente el 4% del PIB. Estas pérdidas económicas afectan la eficiencia del gasto público y limitan la capacidad del gobierno para financiar programas sociales e inversiones clave en infraestructura. La corrupción se convierte, así, en un obstáculo directo para el desarrollo económico y la reducción de desigualdades regionales (Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), 2024).

A nivel social, la corrupción tiene un impacto profundo en la percepción pública del gobierno. Las encuestas de opinión realizadas en 2022 muestran que sólo alrededor del 30% de los italianos confía en las instituciones gubernamentales, reflejando los efectos negativos de los escándalos de corrupción en la legitimidad del Estado. Esta baja confianza complica la implementación de políticas públicas y alimenta el escepticismo hacia las reformas propuestas, creando un círculo vicioso

en el que la desconfianza perpetúa las dinámicas corruptas (Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), 2024).

A pesar de los avances logrados, Italia sigue enfrentando importantes desafíos en la lucha contra la corrupción. Las reformas judiciales y administrativas han mejorado parcialmente la transparencia, pero la corrupción permanece arraigada en ciertos sectores, especialmente en las regiones más afectadas por la influencia del crimen organizado. El caso de Mafia Capitale y los escándalos en la contratación pública son recordatorios de que los esfuerzos anticorrupción deben ser sostenidos y rigurosos para producir resultados duraderos.

La corrupción en Italia sigue siendo un desafío significativo, aunque se han logrado algunos avances mediante reformas estructurales. La mejora en el sistema de supervisión y la aceleración de los procesos judiciales han permitido reducir parcialmente la percepción de impunidad, pero las prácticas corruptas persisten en varios niveles de la administración pública. El impacto económico y social de la corrupción subraya la urgencia de fortalecer las instituciones y mejorar la transparencia en la gestión pública. Para que los avances sean sostenibles, es fundamental promover una cultura de integridad y reforzar la confianza ciudadana en el gobierno. La participación activa de la sociedad civil y la cooperación entre el sector público y privado son esenciales para superar este problema estructural y avanzar hacia una gobernanza más justa y eficiente.

2.3 Comparación entre Colombia e Italia

La comparación entre ambos países revela similitudes notables, especialmente en la persistencia de la corrupción y en la desconfianza generalizada de la ciudadanía hacia las instituciones públicas. Sin embargo, los enfoques adoptados por los dos gobiernos para enfrentar este problema difieren significativamente. Colombia opera en un entorno profundamente afectado por la violencia y la infiltración del crimen organizado en diversas esferas del poder. Por otro lado, Italia ha optado por un enfoque más orientado hacia la reforma institucional, con énfasis en fortalecer el sistema judicial y mejorar la transparencia en la administración pública.

2.3.1 Manifestaciones de las causas históricas

Las variaciones en la corrupción durante 2022-2023 en ambos países pueden estar influenciadas por factores como el contexto político interno, las presiones internacionales y la respuesta a la crisis del COVID-19. La eficacia de las políticas anticorrupción parece estar relacionada con la capacidad de implementar reformas estructurales que promuevan la transparencia y la rendición de cuentas.

La política internacional ha tenido un impacto significativo en la percepción y las prácticas de corrupción en ambos países, Colombia e Italia, durante el período 2022-2023. En Colombia, la política exterior de países influyentes y los organismos internacionales han presionado por reformas anticorrupción más estrictas, especialmente en el contexto de cooperación en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico. La presión de Estados Unidos y la Unión Europea ha llevado a Colombia a adoptar medidas más duras contra la corrupción en ciertos sectores, aunque con resultados mixtos debido a la resistencia interna y a la falta de implementación efectiva (Villalobos Risco, 2023).

En Italia, la política internacional, particularmente la Unión Europea (UE), ha jugado un papel crucial. La UE ha impulsado políticas de transparencia y anticorrupción que afectan directamente a los países miembros. Como resultado, Italia ha tenido que alinearse con las directrices europeas, adoptando reformas en su sistema judicial y medidas de transparencia en la contratación pública. La presión de la UE ha facilitado la implementación de estas políticas, aunque la eficacia varía según la región y la estructura administrativa local (Salvadori, 2023).

La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto considerable en la corrupción en ambos países. En Colombia, la emergencia sanitaria llevó a la aprobación de presupuestos extraordinarios y procedimientos de contratación rápida que, desafortunadamente, fueron vulnerados por la corrupción. El uso de contratos de emergencia para la compra de suministros médicos y la implementación de ayudas sociales se vio envuelto en múltiples denuncias de irregularidades (Transparencia por Colombia, 2023). Esto afectó la eficacia de la respuesta a la pandemia y minó la confianza pública en las instituciones gubernamentales.

Italia, por su parte, también experimentó un aumento en los riesgos de corrupción durante la pandemia. Los fondos de recuperación y los contratos de emergencia se convirtieron en oportunidades para prácticas corruptas, especialmente en el sur del país, donde las redes de corrupción son más fuertes (Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), 2024). Sin embargo, el fortalecimiento de los mecanismos de auditoría y la transparencia impulsada por la UE ayudaron a mitigar algunos de estos riesgos, aunque no los eliminaron por completo.

En Colombia, la efectividad de las políticas anticorrupción ha sido limitada debido a varios factores, como la falta de voluntad política, la ineficiencia administrativa, y la influencia del narcotráfico. Las reformas legales implementadas en los últimos años, como la Ley de Transparencia y la lucha contra la corrupción, han mostrado algunos avances, pero su impacto ha sido modesto. La debilidad en los sistemas de justicia y la falta de recursos para la implementación efectiva han obstaculizado los esfuerzos (Transparencia por Colombia, 2023).

Además, la captura del estado por parte de grupos de interés y la corrupción a nivel regional siguen siendo problemas persistentes. Aunque hay organismos de

control como la Procuraduría y la Contraloría, la politización de estos cuerpos y su limitada independencia reducen su capacidad para combatir la corrupción de manera efectiva (Transparencia por Colombia, 2023).

En Italia, la efectividad de las políticas anticorrupción ha mejorado en la última década, especialmente con la adopción de medidas más estrictas de transparencia y la reforma del sistema judicial. Las políticas impulsadas por la Autoridad Nacional Anticorrupción (ANAC), han permitido un monitoreo más cercano de la contratación pública y la implementación de sistemas de denuncia y protección de denunciantes (Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), 2024). Estos cambios han tenido un impacto positivo en la reducción de algunos tipos de corrupción, especialmente en el norte del país.

Sin embargo, los desafíos persisten, particularmente en las regiones del sur, donde las redes de corrupción son más profundas y están más entrelazadas con el crimen organizado, como la mafia. A pesar de los esfuerzos por descentralizar y hacer más transparentes las administraciones locales, la corrupción sigue siendo un problema arraigado en estas áreas.

Tanto en Colombia como en Italia, la corrupción tiene raíces históricas profundas, pero las diferencias en sus contextos históricos han dado lugar a manifestaciones distintas del fenómeno. En Colombia, la corrupción ha estado históricamente vinculada al clientelismo y al conflicto armado, lo que ha permitido que las redes de poder informales prevalezcan sobre las instituciones formales. En Italia, la corrupción ha estado más relacionada con la herencia de prácticas feudales y el desarrollo de un Estado débil que no logró imponer un control efectivo sobre todas las regiones del país, especialmente en el sur.

Una similitud clave entre ambos países es la utilización del clientelismo como un mecanismo para mantener el control político y económico, así como la presencia de actores criminales que han exacerbado la corrupción. Sin embargo, mientras que en Colombia la corrupción ha sido impulsada en gran parte por el narcotráfico y el conflicto interno, en Italia ha estado más asociada con la influencia de la mafia y la debilidad estructural del Estado.

2.3.2 Análisis Comparativo de los Marcos Legales contra la Corrupción en Colombia e Italia: Evaluación de su Eficacia y Desafíos en el Periodo 2022-2023

El combate contra la corrupción requiere no sólo de medidas efectivas, sino también de un entorno legal robusto que permita identificar, sancionar y prevenir prácticas corruptas. En Colombia, el marco legal anticorrupción incluye una serie de leyes, decretos y normativas que buscan fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la supervisión de los recursos públicos. No obstante, la

persistencia de la corrupción a todos los niveles de gobierno indica que existen desafíos significativos en su aplicación y efectividad.

Por su parte, Italia cuenta con un marco legal anticorrupción que ha evolucionado a lo largo de los años para abordar las complejidades específicas de la corrupción en el país, caracterizada por la infiltración de la mafia y redes clientelistas en el sistema político. A pesar de estos esfuerzos, Italia sigue enfrentando importantes desafíos para erradicar la corrupción, especialmente en las regiones donde la mafia tiene mayor influencia.

La comparación de estos dos marcos legales permite identificar fortalezas y debilidades en cada sistema, comprender las diferencias y similitudes en sus enfoques y evaluar cómo estos marcos responden a los desafíos particulares de cada país.

Colombia ha desarrollado un marco legal complejo que abarca diversas leyes y normativas dirigidas a prevenir y sancionar la corrupción. Entre las más relevantes se encuentran la Ley 1474 de 2011, conocida como el "*Estatuto Anticorrupción*", que establece mecanismos para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, y la Ley 1778 de 2016, que sanciona el soborno transnacional. Además, se han implementado normativas específicas para la contratación pública y el manejo de recursos del Estado, como el Decreto 092 de 2017, que busca regular los contratos con entidades sin ánimo de lucro.

A pesar de estos desarrollos, existen deficiencias significativas en la aplicación efectiva de estas leyes, debido a factores como la debilidad institucional, la falta de coordinación entre entidades de control, la escasez de recursos para la vigilancia y la falta de independencia del poder judicial. Casos recientes, como el "*Caso Centros Poblados*", han puesto de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión y control para evitar la malversación de fondos y mejorar la transparencia en la gestión pública.

Italia, por su parte, ha adoptado un enfoque igualmente amplio, implementando leyes clave como la Ley 190/2012, que establece medidas para la prevención de la corrupción y el fortalecimiento de la transparencia en el sector público, y el Decreto Legislativo 231/2001, que introduce la responsabilidad administrativa de las entidades legales por delitos de corrupción. Italia también ha creado la Autoridad Nacional Anticorrupción (ANAC) como un órgano independiente responsable de la implementación de políticas anticorrupción, monitoreo de contrataciones públicas y promoción de la transparencia.

Sin embargo, la eficacia del marco legal italiano se ha visto limitada por la influencia persistente de la mafia en la política y la administración pública, así como por las redes clientelistas que operan en ciertas regiones. El caso "*Qatargate*" de 2023, es un ejemplo reciente de cómo la corrupción sigue

infiltrándose en las altas esferas del poder político, poniendo en duda la efectividad del marco legal existente y subrayando la necesidad de una mayor coordinación y cooperación internacional para combatir la corrupción de manera integral.

Ambos países han desarrollado marcos legales extensos para combatir la corrupción, pero enfrentan desafíos significativos que limitan su efectividad. En Colombia, los principales desafíos incluyen la debilidad institucional, la falta de recursos para las entidades de control y la corrupción sistemática en la administración pública. En Italia, el principal desafío es la infiltración de la mafia y las redes clientelistas, que han demostrado ser difíciles de erradicar a pesar de los esfuerzos legales y regulatorios.

Este análisis comparativo destaca la necesidad de fortalecer los marcos legales anticorrupción en ambos países. Para Colombia, es crucial mejorar la capacidad de las instituciones encargadas de la vigilancia y el control, garantizar la independencia del poder judicial y aumentar la transparencia en la gestión pública. En Italia, es esencial reforzar la cooperación entre las autoridades nacionales e internacionales, mejorar los mecanismos de protección para denunciantes y testigos, y dismantelar las redes clientelistas y mafiosas que continúan socavando el estado de derecho.

La comparación de los marcos legales de Colombia e Italia ofrece lecciones valiosas para otros países que enfrentan desafíos similares. Un enfoque integral que combine medidas preventivas, sancionadoras y de cooperación internacional es fundamental para combatir eficazmente la corrupción y fortalecer la gobernanza democrática.

3. CORRUPCIÓN: COMPORTAMIENTO SISTÉMICO VS. FALLA REGULATORIA

El comportamiento sistémico de la corrupción se refiere a un contexto en el que esta práctica está integrada en las estructuras políticas, económicas y sociales de un país. En tales sistemas, la corrupción no se limita a incidentes aislados, sino que se convierte en una característica funcional del modo en que operan las instituciones. Las normas informales y las redes de poder prevalecen sobre las leyes oficiales, generando un entorno donde las prácticas corruptas se consolidan como la norma más que como la excepción.

En Colombia, la corrupción sistémica ha sido un problema recurrente. Según el Informe de Transparencia Internacional de 2022, la percepción de corrupción en el país sigue siendo alta, reflejando la infiltración del fenómeno en distintos niveles del gobierno, incluyendo el poder judicial. Esta situación ha obstaculizado tanto la gobernabilidad como el desarrollo económico. Las instituciones en Colombia

suelen carecer de independencia y están influenciadas por redes clientelistas, lo que sugiere que la corrupción tiene un carácter estructural, con incentivos profundamente arraigados en la cultura política que promueven la participación en actos corruptos (Sandoval Piñeros, 2020).

Por su parte, Italia también enfrenta una forma de corrupción sistémica, aunque con particularidades propias. Su historia está marcada por escándalos de gran magnitud, como la operación "*Mani Pulite*" en la década de 1990, que reveló una red profundamente arraigada entre políticos, empresarios y funcionarios públicos (Tomazelli Lemos & Vetis Zaganelli, 2020). Si bien se han introducido reformas después de este escándalo, la corrupción persiste, especialmente en el sur del país, donde la influencia de organizaciones criminales como la mafia exacerba el problema. En Italia, la corrupción sistémica se concentra en áreas específicas y sectores económicos vulnerables, lo que refleja un problema estructural en ciertas regiones más que una práctica generalizada a nivel nacional (Palumbo, 2020).

Por otro lado, las fallas regulatorias en el manejo de la corrupción hacen referencia a la incapacidad de las leyes e instituciones para prevenir, detectar y sancionar estos actos de manera efectiva. En estos casos, la corrupción no es necesariamente endémica, pero la ausencia de un marco regulatorio sólido permite que prolifere.

En Colombia, la corrupción es sistémica y facilitada por una falla regulatoria significativa. Si bien el país cuenta con un marco legal relativamente robusto, su implementación es inconsistente y la impunidad prevalece. La debilidad de las instituciones responsables de combatir la corrupción se manifiesta en la falta de recursos, la limitada efectividad en la aplicación de las políticas anticorrupción y la presencia de corrupción dentro de los mismos organismos de control (Valencia Mosquera, 2020). Estos factores debilitan los esfuerzos por reducir la corrupción y perpetúan un entorno donde los actos corruptos quedan sin sanción.

En Italia, aunque las reformas regulatorias han intentado fortalecer el marco anticorrupción, la efectividad de estas iniciativas se ve limitada por varios obstáculos. La falta de voluntad política y la resistencia a las reformas en sectores clave dificultan la lucha contra la corrupción (Selim de Sales, 2020). Además, la complejidad del sistema legal italiano y la lentitud de la burocracia generan oportunidades para la corrupción, al tiempo que complican la aplicación de las leyes. Aunque las reformas recientes han mejorado la transparencia y la rendición de cuentas, su impacto ha sido insuficiente para erradicar el problema (Sinisi, 2019).

A pesar de las similitudes entre ambos países en cuanto a la persistencia del fenómeno y la desconfianza ciudadana en las instituciones, sus desafíos específicos difieren. En Colombia, la corrupción está profundamente ligada a un comportamiento sistémico alimentado por la debilidad institucional y la influencia

de redes clientelistas. El contexto de violencia y la infiltración del crimen organizado en la política agravan la situación, dificultando los esfuerzos de reforma.

En Italia, aunque la corrupción también presenta características sistémicas, su perpetuación responde en gran medida a fallas regulatorias. A pesar de las reformas adoptadas, la falta de voluntad política y la resistencia institucional limitan la efectividad de los cambios. Además, la influencia de organizaciones criminales en ciertas regiones refuerza estas dinámicas, generando desigualdades en la aplicación de las reformas a nivel regional.

Para Colombia, es esencial romper las redes de poder informal y fortalecer las instituciones encargadas de combatir la corrupción. Esto requiere una combinación de medidas que incluyan el aumento de recursos para los órganos de control, la protección de los funcionarios encargados de investigar delitos de corrupción y la promoción de una cultura de integridad en la administración pública. La lucha contra la corrupción también debe abordar las causas subyacentes, como la desigualdad y la violencia, que refuerzan las dinámicas corruptas.

En Italia, el desafío radica en mejorar la aplicación de las leyes anticorrupción y simplificar los procedimientos burocráticos que dificultan la transparencia. Para que las reformas sean efectivas, es fundamental garantizar la independencia del sistema judicial y reducir las oportunidades de corrupción en la contratación pública y la financiación de partidos políticos. Además, es necesario fortalecer los mecanismos de cooperación entre el Estado y la sociedad civil, fomentando la participación ciudadana en la vigilancia de la gestión pública.

Colombia e Italia enfrentan problemas de corrupción con características tanto sistémicas como regulatorias. Si bien ambos países comparten el reto de restaurar la confianza pública y mejorar la transparencia institucional, los enfoques para abordar el problema deben adaptarse a sus respectivas realidades. En Colombia, la prioridad debe ser fortalecer las instituciones y reducir la influencia del crimen organizado, mientras que en Italia, el foco debe estar en consolidar las reformas regulatorias y simplificar la burocracia. En ambos casos, es fundamental que el combate a la corrupción sea sostenido en el tiempo y cuente con el respaldo tanto de las instituciones como de la sociedad civil para lograr una transformación duradera.

3.1 Análisis del Comportamiento de la Corrupción en Colombia e Italia (2022-2023), entre las Fallas Sistémicas y las Regulatorias

El fenómeno de la corrupción en Colombia e Italia durante el período 2022-2023 plantea la pregunta de si su comportamiento puede atribuirse a la influencia de las fallas de los sistemas políticos y económicos globales, o si es un problema intrínseco relacionado con fallas en sus sistemas administrativos y políticos locales. Este análisis explora ambas perspectivas para determinar cuál es más aplicable en el contexto de estos dos países.

3.1.1 Análisis sistémico: Influencia de los Sistemas Políticos y Económicos Globales

La globalización ha tenido un impacto significativo en la corrupción, facilitando la movilidad de capitales y aumentando la complejidad de las transacciones financieras, lo que a menudo dificulta la detección y el control de prácticas corruptas. En este contexto, tanto Colombia como Italia han experimentado presiones externas que pueden haber exacerbado los problemas de corrupción.

3.1.1.1 Las fallas sistémicas en Colombia

La corrupción en Colombia no es simplemente una serie de eventos aislados, sino un fenómeno sistémico arraigado en la estructura política, social y económica del país. Este sistema permite que la corrupción se perpetúe a través de una red de actores que incluyen funcionarios públicos, empresarios, e incluso actores de la sociedad civil.

En Colombia, la influencia de actores globales, especialmente en el sector extractivo y financiero, ha creado oportunidades para la corrupción. Las multinacionales que operan en el país a menudo tienen recursos y conexiones que les permiten influir en las decisiones políticas y administrativas a su favor, lo que ha llevado a casos de corrupción vinculados a la explotación de recursos naturales y a la evasión fiscal (Valencia Mosquera, 2020). Además, la globalización del narcotráfico ha seguido siendo un factor clave, conectando a Colombia con redes criminales internacionales que operan fuera del alcance de las autoridades nacionales.

Por lo anterior, se identifican como factores sistémicos o estructurales relevantes, los siguientes:

- **Estructuras de Impunidad:** La debilidad del sistema judicial colombiano, marcada por la lentitud de los procesos, la falta de recursos, y la injerencia política, ha creado un entorno de impunidad que permite que la corrupción prospere. Las estadísticas muestran que un alto porcentaje de los casos de corrupción no llega a sentencia condenatoria. Por ejemplo, el informe de Transparencia por Colombia (2023) resalta que menos del 10% de los casos de corrupción denunciados en 2022 resultaron en condenas.

- **Mecanismos de Control Ineficientes:** Las auditorías y los sistemas de control interno en muchas instituciones son ineficaces. La Contraloría General de la República y la Procuraduría General han señalado la falta de capacidad para realizar un seguimiento adecuado y exhaustivo de los recursos públicos, lo que permite que los fondos sean desviados o malversados. Un caso relevante es el del Departamento Administrativo de Salud de Antioquia, donde se descubrieron desviaciones de fondos por más de 15 mil millones de pesos en 2022 (Contraloría General de la República, 2023).
- **Colusión entre el Sector Público y Privado:** La colusión y el tráfico de influencias entre empresarios y funcionarios públicos es un patrón recurrente en muchos escándalos de corrupción. Esta relación simbiótica facilita la adjudicación de contratos y concesiones de manera irregular. Un ejemplo es el escándalo de contratación en Bogotá, donde se demostró que empresas pagaban sobornos a funcionarios para ganar contratos (Valenzano & Serra Cruz, 2023).

Dentro de los casos más significativos que ilustran cómo las fallas sistémicas mencionadas se materializan en actos específicos de corrupción en este período, se tienen:

- **Cartel de la Contratación en Bogotá:** Entre 2022 y 2023, sale a la luz un esquema de corrupción en la contratación pública de Bogotá que involucra a altos funcionarios de la alcaldía y empresarios privados. Estos actores coluden para manipular los procesos de adjudicación de contratos de obras públicas, asegurando que las licitaciones se diseñen para favorecer a ciertas empresas a cambio de sobornos. El esquema expone cómo los pliegos de condiciones se redactan intencionalmente para excluir a competidores legítimos y garantizar la asignación de contratos a aliados específicos.

Se estima que el valor de los contratos irregulares supera los 200 mil millones de pesos, lo que evidencia la magnitud del desfalco y la fragilidad de los controles administrativos en la ciudad (Valenzano & Serra Cruz, 2023). Este caso refleja la falta de transparencia en la gestión de los recursos públicos y la persistente vulnerabilidad de los procesos de contratación ante prácticas corruptas. La Fiscalía General y la Contraloría abren investigaciones para identificar a todos los involucrados y reforzar la supervisión de futuros procesos licitatorios, pero el escándalo deja claro que la reforma estructural en la contratación es urgente.

- **Corrupción en el Sistema de Salud:** El sistema de salud en Colombia también se ve gravemente afectado por la corrupción. Entre 2022 y 2023, varios informes denuncian el desvío de fondos públicos destinados a hospitales y programas de salud pública en diferentes regiones del país. El caso más emblemático ocurre en el Departamento Administrativo de Salud de Antioquia, donde una auditoría revela que más de 15 mil millones de pesos asignados para la mejora de la infraestructura hospitalaria son desviados hacia cuentas privadas y contratos ficticios.

Esta situación deja en evidencia la corrupción en la administración pública de la salud y el impacto directo sobre la calidad del servicio a los pacientes. Los hospitales afectados no reciben los recursos necesarios para su funcionamiento, lo que resulta en la precariedad de la atención médica y en un acceso limitado a tratamientos esenciales (Contraloría General de la República, 2023). Las investigaciones señalan la existencia de redes de funcionarios que coordinan la manipulación de contratos y el desvío de fondos, lo que subraya la necesidad de una mayor supervisión y auditorías independientes en el sector salud.

- **Caso de Sobornos en la Industria Petrolera:** Ecopetrol, la principal empresa estatal de Colombia, se ve involucrada en un escándalo de corrupción en 2023, cuando se descubre que varios funcionarios de la compañía recibieron sobornos de proveedores a cambio de la adjudicación de contratos ventajosos. El caso revela cómo los proveedores pagaban comisiones ilegales para asegurar contratos millonarios, lo que compromete la transparencia de la gestión empresarial y afecta la competitividad del sector energético. Este escándalo subraya las debilidades en los mecanismos de control interno dentro de las empresas estatales y la falta de supervisión efectiva por parte de los órganos de control (Contraloría General de la República, 2023).

El impacto económico de este caso es significativo, ya que los recursos desviados afectan tanto las finanzas de Ecopetrol como la eficiencia operativa de la empresa. El gobierno anuncia medidas para fortalecer los procesos de auditoría y garantizar la transparencia en la gestión de contratos, pero el caso pone en evidencia la necesidad de establecer sanciones más severas y procedimientos más rigurosos para prevenir futuros actos de corrupción en el sector.

Estos casos de corrupción entre 2022 y 2023, ilustran la magnitud del problema en sectores clave de la administración pública y las empresas estatales en Colombia. La contratación pública, el sistema de salud y la industria petrolera representan áreas críticas donde la gestión de recursos debe ser transparente y eficiente, pero que, en cambio, se han convertido en focos de prácticas corruptas. El Cartel de la

Contratación en Bogotá refleja cómo las redes de influencia manipulan los procesos licitatorios para su beneficio personal, afectando directamente la calidad de las obras públicas y la confianza ciudadana. Por su parte, la corrupción en el sistema de salud no sólo desfalca los recursos públicos, sino que también pone en riesgo la vida de miles de colombianos al limitar el acceso a servicios esenciales. Finalmente, el escándalo de sobornos en Ecopetrol expone la vulnerabilidad de las empresas estatales frente a intereses privados, afectando la competitividad de una industria clave para el desarrollo económico del país.

La gravedad de estos casos subraya la necesidad de reformas estructurales en los mecanismos de control y la supervisión de los procesos administrativos en Colombia. La contratación pública requiere procedimientos más transparentes y sistemas de auditoría independientes que reduzcan la manipulación de licitaciones. El sector salud, por su parte, demanda un fortalecimiento de los controles internos y la implementación de sanciones más rigurosas para los funcionarios involucrados en actos corruptos. En el caso de las empresas estatales como Ecopetrol, es fundamental establecer códigos de ética más estrictos y mecanismos de control que prevengan la adjudicación irregular de contratos.

Los casos de corrupción entre 2022 y 2023, evidencian la necesidad urgente de fortalecer las instituciones encargadas de la supervisión y el control de los recursos públicos en Colombia. La lucha contra la corrupción requiere sancionar a los responsables e implementar medidas preventivas que eviten la repetición de estas prácticas. Asimismo, es fundamental promover una cultura de transparencia e integridad en la administración pública, acompañada de la participación activa de la sociedad civil para vigilar la gestión estatal y exigir mayor rendición de cuentas. Sin estos cambios, la corrupción seguirá representando uno de los principales obstáculos para el desarrollo económico y social del país.

La corrupción, también afecta la legitimidad del gobierno y erosiona la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas. Los efectos van más allá del ámbito económico, afectando la estabilidad social y política del país.

- **Erosión de la Confianza Pública:** Según una encuesta realizada por el Barómetro de las Américas en 2023, sólo el 18% de los colombianos confía en el gobierno nacional, lo que refleja el impacto directo de los escándalos de corrupción en la percepción ciudadana (Vanegas Carvajal, Moreno López, & Echeverri Rendón, 2023).
- **Déficit Democrático y Participación Ciudadana:** La corrupción afecta la participación democrática al desincentivar la participación política y electoral. Muchos ciudadanos creen que sus votos no pueden cambiar la estructura corrupta del sistema, lo que lleva a una baja participación en procesos electorales y de control social (Hernández Quintero, 2023).

Dentro de las políticas y estrategias implementadas por el gobierno colombiano para enfrentar la corrupción durante el período 2022-2023, evaluando tanto los avances logrados como las limitaciones que aún persisten, se tienen:

- **Fortalecimiento de Instituciones de Control:** En 2022, se implementaron reformas para fortalecer la Contraloría y la Procuraduría General. Estas reformas buscaron dotar a las entidades de mayor autonomía y recursos para enfrentar la corrupción. Sin embargo, la falta de seguimiento y recursos ha limitado el alcance de estas iniciativas.
- **Estrategias de Transparencia y Rendición de Cuentas:** Se han promovido iniciativas como la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pero su implementación ha sido desigual. Muchas entidades no cumplen con los estándares de publicación de información o lo hacen de manera ineficiente (Transparencia por Colombia, 2023).
- **Colaboración Internacional y Convenios Anticorrupción:** El gobierno ha firmado varios acuerdos internacionales para fortalecer la lucha contra la corrupción, como los de la OCDE. No obstante, estos acuerdos enfrentan desafíos de implementación a nivel local, debido a la resistencia de actores que se benefician del *statu quo* (Hernández Quintero, 2023).

3.1.1.2 Italia, la corrupción como problema estructural

Italia no es ajena a las complejidades que la globalización y su pertenencia a la Unión Europea han añadido a sus dinámicas de corrupción. La burocracia excesiva y la falta de armonización en las normativas entre los estados miembros de la UE facilitan la corrupción transnacional, permitiendo que actores corruptos aprovechen lagunas legales y diferencias regulatorias entre países (Mizzetti & Polacchini, 2023). Estos vacíos crean un entorno favorable para que empresarios y políticos corruptos gestionen operaciones ilícitas a través de múltiples jurisdicciones. A su vez, la mafia italiana ha logrado expandir sus operaciones a nivel internacional, aumentando la dificultad de combatir la corrupción a nivel nacional. La interconexión económica global permite que estas organizaciones criminales operen en diversos sectores, desde el tráfico de drogas hasta la manipulación de contratos públicos, lo que convierte el fenómeno en un reto transnacional.

La corrupción en Italia tiene raíces profundas que afectan tanto a las instituciones públicas como al sector privado. A pesar de los esfuerzos por reformar el sistema judicial, la lentitud con la que se procesan los casos de corrupción sigue siendo un obstáculo crítico. Los procedimientos judiciales prolongados, que pueden extenderse durante años, fomentan la impunidad y desincentivan las denuncias de corrupción, ya que los implicados confían en la ineficacia del sistema para evadir

sanciones. De acuerdo con la Comisión Europea (2023), Italia se encuentra entre los países de la Unión Europea con menor eficiencia en la resolución de casos de corrupción, lo que socava la confianza pública en la justicia (Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), 2024).

Este fenómeno es particularmente notorio a nivel local, donde la política clientelista domina la gestión pública. En estas dinámicas, los favores y los sobornos se intercambian por contratos públicos y concesiones administrativas. La Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC, 2024) documenta numerosos casos recientes, como el ocurrido en la región de Campania, donde varios alcaldes y funcionarios fueron arrestados por manipular contratos públicos para favorecer a empresas específicas. Estos casos reflejan la persistencia de redes de influencia que operan tanto en el ámbito político como en el empresarial, dificultando la implementación de procesos de contratación transparentes.

Se encuentra profundamente arraigada en su cultura política. La falta de transparencia en la gestión pública, unida a la ausencia de mecanismos efectivos de rendición de cuentas, perpetúa estas prácticas ilícitas. Según un informe de Transparency International, el 60% de los ciudadanos italianos considera que el gobierno no está haciendo lo suficiente para combatir la corrupción (Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), 2024). Esta percepción afecta gravemente la legitimidad de las instituciones y refuerza un círculo vicioso de desconfianza ciudadana hacia el Estado, lo que a su vez reduce la participación en la vigilancia de la gestión pública.

Los casos de corrupción en Italia a menudo involucran a figuras políticas de alto nivel, así como a organizaciones criminales que influyen en las políticas públicas y en la adjudicación de contratos. Aquí se referencian algunos de gran reconocimiento:

- **Caso Mafia Capitale (2022):** Uno de los casos más notorios de corrupción es Mafia Capitale, una red criminal descubierta en Roma que involucra a empresarios y políticos en la manipulación de contratos públicos. Esta organización operaba mediante la adjudicación irregular de contratos a empresas vinculadas con el crimen organizado, garantizando así la canalización de fondos públicos hacia actividades ilícitas. El caso expone cómo las conexiones entre la política y el crimen organizado afectan la transparencia en la gestión pública, y cómo los actores corruptos se benefician de la debilidad de los controles estatales (Callejón Hernández, 2023).
- **Caso Tangentopoli en el Siglo XXI:** Aunque Tangentopoli (años 90) fue uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia italiana, las repercusiones y las prácticas relacionadas persisten en la actualidad. Los casos recientes como el de la región de Lombardía, donde funcionarios

públicos y empresarios coludieron para manipular la asignación de contratos de salud durante la pandemia de COVID-19, demuestran que las prácticas de corrupción de alto nivel siguen vivas (Mizzetti & Polacchini, 2023).

- **Corrupción en el Sector Transporte:** La construcción de infraestructuras y la gestión de contratos de transporte también han sido históricamente vulnerables a la corrupción en Italia. Entre 2022 y 2023, se descubrió un esquema de sobornos y licitaciones amañadas en el proyecto del tren de alta velocidad de Turín, implicando a varios funcionarios públicos y empresas constructoras (Callejón Hernández, 2023).
- **Corrupción en la Región de Campania:** En 2023, la ANAC reporta un importante caso de corrupción en la región de Campania, donde varios funcionarios públicos son arrestados por manipular licitaciones de contratos de infraestructura. Este escándalo pone de relieve la falta de supervisión efectiva en la contratación pública, así como la estrecha relación entre empresarios y políticos. La adjudicación amañada de contratos afecta la calidad de las obras públicas, a la vez que genera un grave perjuicio económico al desviar fondos públicos hacia manos privadas (Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), 2024).
- **Caso de la Industria Energética:** Otro caso relevante involucra a empresas del sector energético en acuerdos ilícitos con funcionarios públicos para garantizar contratos ventajosos. Estos escándalos reflejan la vulnerabilidad del sector estratégico de la energía, donde las prácticas corruptas afectan tanto la competitividad como la seguridad energética del país. Las investigaciones revelan que los acuerdos ilegales se establecían mediante sobornos y favores, demostrando la necesidad de fortalecer la supervisión en áreas estratégicas de la economía (Mizzetti & Polacchini, 2023).
- **Sobornos en el Sector de la Construcción:** El sector de la construcción en Italia ha sido tradicionalmente un foco de corrupción. Entre 2022 y 2023, varios casos involucran la manipulación de licitaciones para proyectos de infraestructura pública. Las empresas constructoras, en connivencia con políticos locales, acuerdan el pago de sobornos a cambio de asegurar contratos millonarios. Estas prácticas aumentan los costos de las obras y afectan la calidad y la eficiencia de los proyectos, perjudicando el desarrollo económico y social (Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), 2024).

La corrupción sistémica tiene un impacto directo en la calidad de la gobernanza en Italia y en la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas. Según el Eurobarómetro (2023), más del 70% de los italianos considera que la corrupción es un problema generalizado en el país. Este nivel de desconfianza afecta la

legitimidad de las instituciones gubernamentales y reduce la participación ciudadana en procesos democráticos.

Este problema tiene un costo económico significativo. Un estudio de la Universidad Bocconi (2023), estima que la corrupción le cuesta al país aproximadamente 60 mil millones de euros anuales, afectando la inversión extranjera, el crecimiento económico y el empleo (Callejón Hernández, 2023).

La corrupción endémica desincentiva la participación política y alimenta el cinismo entre los votantes. La percepción de que las élites políticas están más interesadas en mantener sus propios intereses que en servir al público reduce la participación electoral y el compromiso cívico.

Sin embargo, Italia ha implementado varias reformas y políticas para combatir la corrupción, pero estos esfuerzos han tenido resultados mixtos. Entre estos se resaltan:

- **Reformas Judiciales:** En 2022, el gobierno italiano introdujo reformas destinadas a mejorar la eficiencia del sistema judicial y acelerar los juicios de corrupción. Sin embargo, estos cambios aún no han mostrado resultados significativos debido a la falta de recursos y la resistencia dentro del sistema judicial (Martini, 2023).
- **Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública:** A pesar de la implementación de leyes para aumentar la transparencia en la administración pública, la aplicación de estas leyes sigue siendo inconsistente. Muchas instituciones no cumplen con los requisitos de divulgación de información, y los ciudadanos encuentran barreras para acceder a datos públicos (Selim de Sales, 2020).
- **Colaboración Internacional y Normas Anticorrupción:** Italia es signataria de varias convenciones internacionales contra la corrupción, como la Convención de la OCDE y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Sin embargo, los desafíos de implementación y la falta de voluntad política a nivel local han limitado la efectividad de estos acuerdos (Broggio, 2023).

3.1.2 La corrupción como un fenómeno regulatorio: Falla en los Sistemas Administrativos y Políticos Locales

A pesar de la influencia de factores globales, tanto en Colombia como en Italia, gran parte de la corrupción parece estar más estrechamente vinculada a fallas intrínsecas en sus sistemas administrativos y políticos locales. Estas fallas se

manifiestan en la debilidad institucional, la falta de independencia judicial, y la prevalencia de redes clientelistas y mafiosas que han capturado el aparato estatal.

3.1.2.1 Las fallas regulatorias en Colombia

El tema de las fallas regulatorias de la corrupción en Colombia durante 2022-2023, se centra en cómo las deficiencias en el marco normativo, la implementación de leyes y la falta de supervisión efectiva han permitido que la corrupción persista en diversas áreas del sector público y privado. A continuación, se aborda este tema con un enfoque en los principales aspectos que destacan en estos años.

- **Deficiencias en el Marco Normativo:** Colombia cuenta con un conjunto de leyes y reglamentos diseñados para prevenir y combatir la corrupción. Sin embargo, estas normativas presentan varias debilidades. En muchos casos, las leyes no se actualizan para reflejar las nuevas modalidades de corrupción y los cambios en el entorno económico y social. La fragmentación y falta de coherencia entre diferentes normativas también pueden crear lagunas legales que facilitan la corrupción (Villalobos Risco, 2023).
 - *Implementación Ineficiente de las Leyes Anticorrupción:* Una de las fallas más significativas es la implementación ineficaz de las leyes existentes. Aunque existen normas rigurosas, como la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), su aplicación no ha sido consistente. Según el informe de la Autoridad Nacional de Transparencia de Colombia (2023), muchos casos de corrupción no se investigan adecuadamente debido a la falta de recursos, capacitación, y voluntad política en las instituciones encargadas de hacer cumplir estas leyes.
 - *Falta de Supervisión y Rendición de Cuentas:* Otra falla regulatoria es la falta de mecanismos efectivos de supervisión y rendición de cuentas. Las auditorías internas y externas a menudo son débiles o están sujetas a influencia política. La Autoridad Nacional de Transparencia de Colombia (2023) indica que los controles existentes no son suficientes para detectar y prevenir el desvío de recursos públicos y que las entidades responsables de la supervisión necesitan mayor independencia.
 - *Corrupción en los Procesos de Contratación Pública:* Uno de los sectores más vulnerables a la corrupción en Colombia es el de la contratación pública. Las fallas regulatorias incluyen la falta de transparencia en los procesos de licitación, la colusión entre empresas y funcionarios públicos, y la manipulación de pliegos de condiciones para favorecer a ciertos actores. A pesar de los avances

en la normativa de contratación pública, las prácticas corruptas continúan prevaleciendo debido a la debilidad en la supervisión y sanción de las irregularidades.

- ***Propuestas de Mejora y Reformas Necesarias:*** Para abordar estas fallas regulatorias, se han propuesto varias reformas, incluyendo la modernización del marco normativo, la mejora de los sistemas de monitoreo y auditoría, y el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la lucha contra la corrupción. Un enfoque más integral que combine medidas preventivas, de control y sanción puede ser clave para mejorar la gobernanza y reducir los niveles de corrupción en el país (Niño, 2023).

En Colombia, la corrupción ha sido un problema persistente debido a la fragilidad de sus instituciones y la falta de capacidad del Estado para implementar y hacer cumplir leyes anticorrupción. A pesar de los esfuerzos recientes por fortalecer las instituciones y promover la transparencia, el país sigue luchando contra la corrupción endémica en varios niveles de gobierno. El clientelismo, una característica histórica de la política colombiana, sigue siendo un obstáculo importante para el buen gobierno, permitiendo que las prácticas corruptas continúen floreciendo a nivel local y regional (Valenzano & Serra Cruz, 2023).

3.1.2.2 Fallas regulatorias en Italia

Las fallas regulatorias de la corrupción en Italia, al igual que en muchos otros países, reflejan una combinación de factores que van desde un marco legal incompleto o inadecuado, hasta la implementación débil de las leyes anticorrupción y la falta de rendición de cuentas efectiva. Durante 2022 y 2023, Italia ha enfrentado diversos desafíos relacionados con la corrupción que afectan tanto al sector público como al privado. A continuación, se aborda este tema destacando los puntos más relevantes en el contexto italiano.

- ***Debilidades en el Marco Legal Anticorrupción:*** Italia cuenta con una serie de leyes anticorrupción, como la Ley 190/2012, conocida como "Ley Anticorrupción", que establece medidas de prevención y sanción de la corrupción en la administración pública. Sin embargo, esta ley, junto con otras regulaciones como el Decreto Legislativo 231/2001 sobre responsabilidad penal de las empresas, presenta deficiencias que permiten lagunas legales. La aplicación desigual de las normativas y las excepciones dentro de estas leyes crean brechas que actores corruptos pueden explotar (Selim de Sales, 2020).
 - ***Implementación Inconsistente de las Normas:*** La implementación de las leyes anticorrupción en Italia ha sido inconsistente. Aunque las leyes están bien definidas, la falta de recursos, la burocracia, y la

ineficacia en la coordinación entre diferentes entidades gubernamentales afectan su efectividad. De acuerdo con la Autoridad Nacional Anticorrupción de Italia (ANAC) en su informe de 2023, muchos casos de corrupción no son investigados en profundidad, y las sanciones aplicadas a menudo no son proporcionales a la gravedad del delito (Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), 2024).

- *Problemas en el Sistema Judicial:* El sistema judicial en Italia también enfrenta críticas debido a su lentitud y a la falta de eficiencia en el procesamiento de casos de corrupción. Esto genera un ambiente de impunidad que, de acuerdo con un informe del Transparency International Italia (2022), desincentiva la denuncia de la corrupción. La lentitud en los procesos judiciales y las apelaciones interminables permiten que muchos casos de corrupción no lleguen a una conclusión firme o que los responsables eviten las sanciones.
- *Fallas en los Mecanismos de Supervisión y Auditoría:* Los mecanismos de supervisión y auditoría en Italia han sido cuestionados por su falta de independencia y efectividad. A pesar de la existencia de instituciones como la ANAC, que supervisa la prevención de la corrupción y la transparencia, la dependencia política y la insuficiencia de recursos limitan su capacidad para llevar a cabo investigaciones exhaustivas y sancionar efectivamente a los culpables (Mizzetti & Polacchini, 2023).

Para abordar las fallas regulatorias de la corrupción en Italia, se han propuesto varias reformas. Estas incluyen una mayor independencia de la ANAC, la digitalización de los procesos de contratación pública para aumentar la transparencia, y la implementación de políticas más estrictas de rendición de cuentas. Además, es esencial fortalecer la cooperación entre las autoridades judiciales y de control para mejorar la eficacia en la investigación y persecución de delitos de corrupción (Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), 2024).

DISCUSIÓN

La corrupción es un fenómeno multifacético que afecta a múltiples países, aunque en distintos grados y con diferentes expresiones según el contexto local. Este fenómeno puede estar influenciado tanto por factores internos, como la debilidad institucional y las dinámicas políticas, como por factores globales, como la integración económica y las redes transnacionales de crimen. En el caso de Colombia e Italia, dos países con contextos socioeconómicos y políticos distintos, resulta fundamental analizar las particularidades que determinan el comportamiento de la corrupción en cada uno, identificando si sus causas

proviene de dinámicas internacionales o si responden a problemas estructurales internos.

En un mundo cada vez más interconectado, la globalización ha facilitado el comercio y el intercambio cultural y la expansión de prácticas corruptas a través de fronteras. La integración económica y la liberalización de los mercados han abierto oportunidades para que actores públicos y privados se involucren en esquemas de corrupción transnacional. Las redes internacionales de corrupción suelen aprovechar las diferencias en las regulaciones entre países y la existencia de paraísos fiscales, donde es posible ocultar activos y blanquear dinero sin mayores controles. Según Transparency International (2022), la falta de un marco regulatorio global coherente permite que estas prácticas corruptas prosperen en lugares donde la vigilancia es débil y los incentivos para la rendición de cuentas son bajos (Transparency International, 2024).

Políticas internacionales como los acuerdos de libre comercio o las regulaciones financieras internacionales también pueden tener un impacto significativo en la corrupción. En ocasiones, estas políticas introducen cambios rápidos en los sistemas locales que son aprovechados por actores corruptos. Asimismo, la influencia de instituciones internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Mundial, puede generar espacios para la corrupción. Si bien estas organizaciones promueven reformas económicas y de gobernanza, en algunos casos las medidas impuestas, como la austeridad o la privatización, pueden ser mal implementadas o manipuladas por actores locales en beneficio propio, debilitando aún más las instituciones y fomentando prácticas ilícitas (Villalobos Risco, 2023).

Colombia enfrenta un entorno donde la corrupción está profundamente vinculada con problemas estructurales como el clientelismo, el nepotismo y la debilidad del Estado en varias regiones. La financiación ilegal de campañas y la falta de transparencia en el sistema político perpetúan un ciclo de corrupción que afecta la legitimidad del gobierno y obstaculiza el desarrollo social y económico. En ciertas zonas, especialmente aquellas afectadas por la presencia de grupos armados ilegales y el narcotráfico, la corrupción se convierte en una herramienta para obtener influencia y garantizar la impunidad. Estas dinámicas afectan al gobierno y a las instituciones de control, donde los funcionarios se ven cooptados o intimidados para permitir que estas redes operen sin restricciones (Niño, 2023).

En Italia, aunque la estructura del Estado es más sólida, la corrupción sigue siendo un problema significativo, especialmente en las regiones del sur, donde la mafia mantiene una fuerte influencia sobre la política y la economía local. A pesar de varias reformas judiciales y políticas en las últimas décadas, el problema persiste debido a la falta de aplicación efectiva de las leyes y a una cultura de impunidad. La mafia no sólo se infiltra en la política local, sino que también participa en la adjudicación de contratos públicos, creando un entorno donde los

sobornos y el tráfico de influencias son comunes. Esta situación refleja cómo las prácticas corruptas pueden adaptarse incluso en contextos con marcos regulatorios avanzados, aprovechando la burocracia excesiva y la fragmentación institucional (Salvadori, 2023).

A pesar de las diferencias en sus contextos, ambos países comparten serias dificultades en la implementación de políticas anticorrupción. En Colombia, las instituciones encargadas de combatir la corrupción, como la Contraloría y la Fiscalía, carecen de los recursos y la independencia necesarios para realizar su trabajo de manera efectiva. Las redes clientelistas que operan dentro del aparato estatal obstaculizan las reformas, y la impunidad sigue siendo un problema crónico. A nivel local, los gobiernos enfrentan dificultades adicionales, ya que muchas regiones están dominadas por intereses privados o criminales que cooptan la gestión pública.

En Italia, aunque las instituciones de control son más robustas, la burocracia lenta y compleja dificulta la implementación eficiente de las reformas. A pesar de los esfuerzos de la Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) para mejorar la transparencia en la contratación pública, la resistencia interna y la falta de coordinación entre los distintos niveles de gobierno limitan los avances. La corrupción sigue presente en sectores estratégicos como la infraestructura y la energía, y los vínculos entre la mafia y la política local perpetúan estas dinámicas (Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), 2024). Además, la fragmentación de competencias entre las instituciones judiciales y administrativas crea espacios donde las prácticas corruptas pueden operar sin consecuencias inmediatas.

A pesar de las diferencias en sus entornos sociales y políticos, Colombia e Italia comparten varios desafíos comunes. En ambos países, la corrupción afecta la legitimidad del Estado y genera una crisis de confianza pública en las instituciones. La falta de una supervisión efectiva y los problemas de coordinación entre los órganos de control dificultan la lucha contra este fenómeno, lo que perpetúa la percepción de impunidad. Sin embargo, las causas y manifestaciones de la corrupción varían según el contexto. Mientras que en Colombia el problema está profundamente ligado a la violencia, el narcotráfico y la debilidad institucional, en Italia se manifiesta principalmente a través de redes clientelistas y la infiltración de la mafia en la política local y en la economía regional.

CONCLUSIONES

Las causas históricas de la corrupción en Colombia e Italia son complejas y están profundamente arraigadas en sus respectivos contextos históricos. En Colombia, la corrupción ha sido alimentada por un legado de clientelismo y conflicto armado, mientras que en Italia ha estado vinculada a la herencia de un Estado débil y la influencia de la mafia. A pesar de las diferencias, ambos países comparten la

necesidad de abordar estos legados históricos para combatir la corrupción de manera efectiva en el presente.

Si bien los sistemas políticos y económicos globales han influido en la corrupción en Colombia e Italia durante el período 2022-2023, parece que gran parte del problema es atribuible a fallas intrínsecas en sus sistemas administrativos y políticos locales. En ambos países, la debilidad institucional, el clientelismo, y la influencia de redes criminales han sido factores determinantes en la perpetuación de la corrupción. Aunque la globalización ha creado nuevas oportunidades para la corrupción, las soluciones más efectivas probablemente necesitarán abordar las fallas locales que permiten que estas prácticas continúen.

La corrupción en Colombia es un fenómeno complejo y arraigado que ha tenido profundas implicaciones sociales, políticas y económicas. La historia de la corrupción en el país puede rastrearse desde la época colonial, cuando las estructuras de poder y administración eran altamente centralizadas y vulnerables a prácticas corruptas. Sin embargo, el fenómeno se ha exacerbado en las últimas décadas, especialmente a partir del siglo XX, cuando el narcotráfico comenzó a influir significativamente en las dinámicas políticas y económicas del país. Sigue siendo un problema estructural y sistémico que requiere no sólo reformas legales e institucionales, sino también un cambio profundo en la cultura política y en la conciencia ciudadana. Es fundamental que las instituciones se fortalezcan y que la sociedad civil asuma un papel más activo en la lucha contra la corrupción.

La corrupción en Italia sigue siendo un problema estructural que requiere reformas más profundas y una mayor voluntad política para erradicarla. La combinación de reformas judiciales efectivas, una administración pública transparente y una mayor participación ciudadana es esencial para superar estas fallas sistémicas.

Italia, por su parte, ha enfrentado un problema similar con la captura del Estado por redes mafiosas y clientelistas. A pesar de las reformas introducidas después de los escándalos de corrupción de la década de 1990, la administración pública italiana sigue siendo vulnerable a la corrupción, especialmente en el sur del país, donde la influencia de la mafia es más fuerte. La complejidad del sistema burocrático italiano y la lentitud del sistema judicial han permitido que la corrupción persista, incluso en medio de los esfuerzos por combatirla.

El análisis del comportamiento de la corrupción en Colombia e Italia durante el período 2022-2023 muestra que ambos factores, tanto las fallas de los sistemas políticos y económicos globales como los problemas locales intrínsecos, contribuyen al fenómeno. Sin embargo, la evidencia sugiere que en ambos países, la corrupción está más influenciada por problemas internos específicos relacionados con la debilidad institucional, la falta de voluntad política para implementar reformas y la cultura de la impunidad. Aunque los factores globales

pueden intensificar estos problemas, es en el nivel local donde se deben realizar cambios significativos para combatir la corrupción de manera efectiva.

La corrupción en Colombia e Italia durante el período 2022-2023 muestra elementos tanto de comportamiento sistémico como de fallas regulatorias. En Colombia, la corrupción está profundamente arraigada en las estructuras políticas y sociales, lo que sugiere un comportamiento sistémico. Sin embargo, también existen fallas regulatorias significativas que permiten la perpetuación del problema. En Italia, aunque la corrupción tiene características sistémicas en ciertas áreas, la falla regulatoria es un factor clave que limita la efectividad de las políticas anticorrupción. Para abordar la corrupción de manera efectiva, ambos países deben trabajar en reforzar tanto sus estructuras institucionales como sus marcos regulatorios.

La corrupción en Colombia e Italia es un fenómeno que refleja tanto dinámicas globales como problemas internos. La globalización ha facilitado la corrupción transnacional, pero las fallas estructurales dentro de cada país son las que permiten que este fenómeno persista. En Colombia, la prioridad debe ser fortalecer las instituciones de control, romper las redes clientelistas y reducir la influencia del narcotráfico en la política. En Italia, es fundamental simplificar la burocracia, mejorar la coordinación entre instituciones y asegurar la aplicación efectiva de las leyes. En ambos casos, una mayor cooperación internacional y la participación activa de la sociedad civil son esenciales para promover una cultura de transparencia y avanzar hacia una gobernanza más eficiente y justa.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). (2024). Funcionarios de Transparencia y Prevención de la Corrupción (RTPC) y los planes a 3 años. *ANAC, Revista Digital*, En: https://antifraud-knowledge-centre.ec.europa.eu/library-good-practices-and-case-studies/good-practices/corruption-prevention-and-transparency_es.

Ayala García, J., & et al. (2022). *La corrupción en Colombia: un análisis integral*. Bogotá, D.C.: Banco de la república.

Broggio, P. (2023). *Governare l'odio. Pace e giustizia criminale nell'Italia moderna, (secoli XVI-XVII)*. Roma: Viella.

Callejón Hernández, C. (2023). La financiación ilícita de partidos políticos en Italia. En L. Morillos Cuevas, *Respuestas jurídicas frente a la corrupción política. - (Ensayos penales)* (págs. 863-893). Madrid, España: Dykinson.

- Carlóni, E. (2017). El sistema de la lucha contra la corrupción en Italia. Características, tendencias y problemas abiertos. *Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica*, (7):86-102.
- Castillo Pinta, Y. I. (2021). La corrupción en Colombia, un análisis desde la fase precontractual. *Universidad Militar Nueva Granada*, 1-30.
- Congreso de Colombia. (2000). *Ley 599 de 2000. Código Penal Colombiano*. Bogotá, D.C.: Diario Oficial.
- Congreso de Colombia. (2003). *Ley 850 de 2003. Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas*. Bogotá, D.C.: Diario Oficial.
- Congreso de Colombia. (2011). *Ley 1474 de 2011. Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*. Bogotá, D.C.: Diario Oficial.
- Congreso de Colombia. (2014). *Ley 1712 de 2014. Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones*. Bogotá, D.C.: Diario Oficial.
- Congreso de Colombia. (2022). *Ley 2195 de 2022. Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones*. Bogotá, D.C.: Diario Oficial.
- Contraloría General de la República. (2023). *Cartilla para el fortalecimiento de Hallazgos con incidencia fiscal*. Bogotá, D.C.: CGR.
- De La Hoz Mercado, J. E. (2021). La corrupción en Colombia. *administración & Desarrollo*, 51(2):123-136.
- Hernández Quintero, H. A. (2023). El derecho penal como herramienta contra la corrupción en Colombia. *Revista de la Academia Colombiana de Jurisprudencia*, (371):501-528.
- Kahn, T., & Saavedra, V. (2021). La corrupción en Colombia: diagnóstico y recomendaciones para controlarla. Documento elaborado en el marco de la Comisión de Expertos Anticorrupción de Fedesarrollo. *Coyuntura Económica: Investigación Económica y Social*, (51):115-172.
- Martini, F. (2023). Corrupción en Italia: el antes y el después de la reforma Severino. *Encuentros Multidisciplinares*, (67):1-6.
- Mazzolini, S. (2020). Italia: una coyuntura particular. *Nueva Sociedad*, (286):14-24.

- Mizzetti, L., & Polacchini, F. (2023). La disciplina anticorrupción en Italia entre políticas de prevención y de represión. *UNAM. Instituto de Investigaciones Jurídicas*, 1-22.
- Niño, M. (2023). Corrupción: ampliando el alcance. *SocARXIV*, En: <https://doi.org/10.31235/osf.io/6dm8q>.
- Palumbo, M. (2020). *Cómo el fenómeno de la corrupción afecta a nuestra sociedad: análisis, medición, ideas y teorías*. Roma, Italia: Roma RM.
- Pantoja Barrios, S. (2022). La lucha contra la corrupción en el territorio: control fiscal territorial y percepciones y experiencias ciudadanas en torno a la corrupción en Colombia. *Desarrollo y Sociedad*, 11-76.
- Salvadori, I. (2023). Prevención y represión de la corrupción en Italia: contratación pública y corrupción. *Pluriverso*, (13):19-27.
- Sandoval Piñeros, D. A. (2020). Los problemas empíricos de la narcocultura como concepto para el análisis de la violencia, el consumo y la corrupción en Colombia. *Cuadernos de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Jujuy*, (58):35-58.
- Selim de Sales, S. J. (2020). Observaciones críticas sobre la Ley n. 3/2019 - Italia (la denominada ley spazzacorrotti). *Polít. Crim.*, 15(30):1051-1056.
- Sinisi, M. (2019). Las reformas de transparencia y legislación anticorrupción en Italia. Los contratos públicos y el papel jugado por ANAC. *Cuadernos de derecho Local*, 184-205.
- Tomazelli Lemos, J., & Vetis Zaganelli, M. (2020). Mani pulite, 28 años más tarde. *Derecho y Cambio Social*, (59):1-22.
- Transparencia por Colombia. (11 de 11 de 2023). *Índice de Percepción de la Corrupción (IPC)*. Obtenido de <https://transparenciacolombia.org.co/colombia-mejora-ipc-2023/>
- Transparency International. (2024). *Índice de percepción de la corrupción 2023: el debilitamiento de los sistemas de justicia deja a la corrupción sin controles*. U.S.A.: T.I. Choose. En: <https://www.transparency.org/es/press/cpi2023-corruption-perceptions-index-weakening-justice-systems-leave-corruption-unchecked>.
- Valencia Casallas, O. L. (2020). Delitos de corrupción en Colombia: variables socioculturales, institucionales y criminológicas. *Diversitas: Perspectivas en Psicología*, 16(1):181-199.
- Valencia Mosquera, P. (2020). La corrupción en Colombia: neoliberalismo, despolitización y reactivación de antagonismos. *Revista de Estudios Colombianos*, (56):76-88.

- Valenzano, A. S., & Serra Cruz, D. (2023). El problema del bien jurídico protegido en el delito de corrupción privada en Colombia. Un análisis a la luz de la evolución del tipo penal en Italia y en los países de la Península Ibérica. *Catalogo dei prodotti della ricerca*, 273-298.
- Vanegas Carvajal, E. A., Moreno López, V., & Echeverri Rendón, P. (2023). Ética de lo público: formar para la integridad humana y profesional en el contexto de la educación superior en Colombia. *Revista CS*, (31):297-315.
- Villalobos Risco, O. M. (2023). Gobierno electrónico, la solución a la lucha contra la corrupción: revisión sistemática. *Comuni@ccion: Revista de Investigación en Comunicación y Desarrollo*, 14(2):161-172.